



Lunes 16 de octubre de 1950,
a las 15 horas

QUINTO PERIODO DE SESIONES

Documentos oficiales

Lake Success, Nueva York

INDICE

Página

Reservas a las convenciones multilaterales (A/1372) (continuación) 69

Presidente: Sr. V. OUTRATA (Checoslovaquia).

**Reservas a las convenciones multilaterales
(A/1372) (continuación)**

[Tema 56]*

1. El Sr. GOTTLIEB (Checoslovaquia) resume la opinión de su delegación sobre la cuestión de las reservas a los tratados multilaterales. El delegado de Polonia ha mostrado claramente que los Estados contratantes tienen derecho a presentar reservas a todos los tratados multilaterales, incluso los tratados legislativos y que las objeciones de una de las partes contratantes no pueden impedir a un Estado que hace una reserva llegar a ser parte en la convención. Eso es evidente cuando los tratados se concluyen sobre la base del principio de la mayoría. La minoría debe tener derecho a formular reservas porque la participación en un tratado es una expresión de la soberanía estatal.

2. Al examinar esa cuestión la Comisión no debe dejarse guiar exclusivamente por la práctica de la Sociedad de las Naciones; debe también tener en cuenta la evolución ulterior del derecho internacional, incluso la Carta de las Naciones Unidas. La Sociedad de las Naciones se había fundado en el principio de la unanimidad, en tanto que en las Naciones Unidas prevalece el principio de la mayoría, como lo prueba el Artículo 18 de la Carta. Lógicamente, pues, el concepto del derecho de formular reservas a los tratados debe reflejar esa diferencia de principio.

3. La delegación de Checoslovaquia estima que es ilógico atribuir una importancia indebida a los tratados de las Naciones Unidas y colocar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en una categoría especial. Las reservas a los tratados multilaterales no son una novedad; varias de esas reservas se mencionan en el informe del Secretario General (A/1372). Los tratados legislativos concluidos fuera de la Organización pueden también enumerarse como ejemplos adicionales. Si el problema ha sido simplificado, teniendo en cuenta la función del Secretario General como depositario, la supuesta necesidad de una solución de procedimiento ha sido convertida en una cuestión de fondo. Ese es un procedimiento equivocado.

4. El caso de la convención sobre el genocidio está siendo tratado en forma paradójica. Varios oradores han dicho que de la excepción se está sacando una regla demasiado general. Por un lado se encarece que los tratados legislativos multilaterales no sean alterados; por otro lado, sin embargo, algunas delegaciones están dispuestas a tratar la cuestión del derecho de los Estados a formular reservas, derecho nacido de su participación en el tratado, por medio de una regla formal de procedimiento aprobada por el voto de una mayoría en la Asamblea General. Esa contradicción inaceptable no puede ser solucionada por la Corte Internacional de Justicia, que carece de competencia en la materia porque no está facultada para crear una ley nueva. Además, desde ese punto de vista, la opinión de la Comisión de Derecho Internacional sobre el asunto sólo podría servir de base a nuevos debates si el derecho de los Estados a hacer reservas fuese todavía negado.

5. Hay otra paradoja: se ha encarecido que se haga el mayor uso posible de los tratados multilaterales en beneficio del desarrollo del derecho internacional. Por otra parte, hay una disposición a sacrificar el desarrollo de los tratados legislativos en razón del principio de la mayoría, e invocando la llamada identidad de relaciones jurídicas nacida de la uniformidad del derecho, y por causa de dificultades técnicas.

6. En su informe, el Secretario General se da cuenta del peligro inherente en toda medida en que se exija el consentimiento unánime de las partes contratantes antes de que puedan aceptarse reservas. El informe plantea la cuestión de saber si una disposición tan rígida puede ser aplicada a todas las reservas o solamente a las llamadas *essentiali negotii*. Esa es la única interpretación posible de la frase "En convenciones de finalidad legislativa debe suponerse que un Estado que desee ser parte intenta aplicar por lo menos la substancia del acuerdo" (A/1372, párr. 34). Viendo los grandes peligros que podrían presentarse, el informe del Secretario General también declara que: "pues es evidente que la razón de que se exija el consentimiento unánime no es que un Estado pueda excluir a otro de la participación en un acuerdo multilateral fundándose simplemente en su desaprobación teórica de la reserva, sino tan sólo en el grave motivo de que considera que la reserva modifica tan directamente a la esencia de la

* Indica el número del tema en el programa de la Asamblea General.

convención que choca con sus propósitos fundamentales" (A/1372, párr. 34).

7. La regla del consentimiento unánime no sólo suscitara muchas cuestiones dudosas sino también convertiría al Estado que desaprobaba una reserva en juez del Estado que presentó la reserva. No hay ninguna autoridad que pueda decidir si la objeción a la reserva fué hecha por motivos que no son serios. Las partes están evidentemente en condiciones desiguales, ya que el Estado que se niega a aceptar la reserva puede justificar su acción invocando el principio de que el acuerdo de todas las partes contratantes es necesario para el reconocimiento de la reserva. Sin embargo, los defensores del requisito del consentimiento unánime dirían, además, que a fin de excluir la incertidumbre jurídica sería mejor invalidar la firma, ratificación o adhesión de un Estado que ha hecho una reserva, sin tomar en cuenta el hecho de que se estorba así la promoción de una nueva norma internacional creada por un tratado multilateral. Esa desigualdad de las partes que es contraria a todo principio de equidad, podría también interpretarse en el sentido de que da al Estado que se opone el derecho de actuar por todas las demás partes contratantes. Esa es una situación increíble, en que un Estado asume responsabilidades por las que no está obligado a responder ante nadie.

8. El Sr. Gottlieb luego da un ejemplo concreto de la situación que podría suscitarse impidiendo a un Estado participar en un tratado. En una de sus dos reservas a la convención sobre el genocidio, el Gobierno de Checoslovaquia expresó su desacuerdo con el artículo XII de ese instrumento, por cuanto dispone que corresponde a las Potencias coloniales y a las Autoridades Fiduciarias resolver si la convención ha de ser aplicada al territorio del cual son responsables y cuándo ha de serlo. Por medio de esa reserva, el Gobierno de Checoslovaquia trató de extender a otros territorios la aplicación de la convención.

9. Es ilógico y contradictorio decir que en el caso de tal reserva debería ser posible negarse a aceptar el instrumento de ratificación y reducir así doblemente el área territorial a que esa importante convención debe aplicarse. En consecuencia, es claro que en más de un sentido la adhesión al principio de la unanimidad en la cuestión de las reservas es contraria a los principios de la Carta referentes al fomento de la cooperación internacional y al impulso del desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, de que trata el Artículo 13 de la Carta. Además, es contraria a los Capítulos XI y XII de la Carta.

10. Refiriéndose de nuevo al artículo XII de la convención sobre el genocidio, señala que es una de las llamadas cláusulas coloniales, es decir, una reserva presentada por las Potencias metropolitanas y fiduciarias. La delegación de Checoslovaquia votó contra esa cláusula cuando se discutió la convención, pero fué adoptada a causa del principio predominante de las decisiones mayoritarias. ¿Es posible admitir que si un Estado desaprueba una cláusula que realmente no es sino una reserva, debe impedírsele que firme o que ratifique el resto del tratado? Sería una situación muy poco equitativa si una de las partes contratantes sólo necesitara una mayoría de los votantes para lograr que se aceptara su reserva, mientras la parte que desaprobaba esa reserva se viera excluida del tratado en conjunto si no

podiese obtener el consentimiento de todas las partes contratantes interesadas.

11. Del ejemplo citado, resulta claro que el principio de la mayoría debe también disponer que la minoría tenga el derecho de formular reservas particularmente cuando esa minoría ha manifestado su desaprobación a la disposición de que se trata durante el período de negociaciones. A su juicio, ese es un ejemplo claro del derecho de reciprocidad. Como consecuencia de la negativa a aceptar una reserva a la cláusula colonial, el Estado respectivo que presenta la reserva sería excluido de las relaciones resultantes del tratado, aun con Estados que no administraran territorios coloniales o en fideicomiso. El carácter ridículo de esa situación viene a ser aún más notorio cuando una reserva es objetada por una parte que sólo ha firmado la convención y no tiene la intención de ratificarla.

12. El Sr. Gottlieb considera que la Sexta Comisión debe resolver ahora si adopta la teoría rígida y la práctica anticuada de la Sociedad de las Naciones, o si escoge la práctica lógica y jurídicamente más correcta que conduciría al desarrollo y al fomento del derecho internacional.

13. Se han hecho muchas referencias a las altas finalidades del Artículo 13 de la Carta y a la necesidad de fomentar la cooperación internacional y de poner en práctica los propósitos y principios de la Carta, resolviendo los problemas internacionales y promoviendo el respeto a los derechos del hombre, cuestión con la cual se relaciona estrechamente la convención sobre el genocidio.

14. La segunda reserva del Gobierno de Checoslovaquia a la convención sobre el genocidio, al efecto de que no se acepte *in blanco* la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y según la cual es indispensable el acuerdo entre las partes contratantes respecto de cada cláusula, demuestra claramente la situación ilógica a que puede conducir el principio de la unanimidad. El artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia permite que los propios Estados decidan si en ciertas instancias reconocerían como obligatoria la jurisdicción de la Corte.

15. Finalmente, se ha acentuado varias veces, que las reservas menoscababan la uniformidad lograda en el texto de los tratados correspondientes. Tal principio, sin embargo, se destruye a sí mismo. Sus defensores recalcan la necesidad de que las reservas sean aceptadas por unanimidad. Esto sólo significa que la uniformidad sobre la cual hacen tanto hincapié no es incondicional. Tal consentimiento a una reserva da por resultado la creación de dos bloques distintos; un grupo de partes que ratifican el documento sin reservas y otro grupo que, sobre la base de las reservas aceptadas, está relacionado con las otras partes por una relación jurídica modificada. Si se permite la posibilidad de que existan diferentes sistemas contractuales, no hay justificación para decir que no se podrían presentar modificaciones a un tratado que sólo tuviera efecto entre dos de las partes. Por consiguiente, jurídica y lógicamente es insostenible la alegación de que las objeciones de una de las partes a una reserva deben anular la relación jurídica con todas las partes restantes que no hayan desaprobado tal reserva.

16. El argumento de que una pluralidad de reservas y la consiguiente variedad de relaciones jurídicas haría

difícil llevar una cuenta exacta de la situación, es una objeción puramente técnica. Tales dificultades han sido superadas en el pasado en el caso de los tratados internacionales de carácter legislativo importante. Por ejemplo, una variedad de reservas no perjudicó al XIII Convenio de La Haya de 1907, relativo a los derechos y deberes de las Potencias neutrales en caso de guerra marítima, que, como resultado de las reservas hechas, ha creado 10 sistemas de relaciones, aunque el propio Convenio sólo está fundado en un sistema.

17. Para resumir, el Sr. Gottlieb manifiesta que la teoría de la nulidad absoluta de las reservas no aceptadas por alguna de las partes contratantes es dogmática, rígida, jurídicamente defectuosa y no responde a las necesidades de la vida internacional. Impide el desarrollo de la cooperación internacional entre las naciones y menosprecia la soberanía de los Estados. La adición de una reserva, aun si es aprobada por las partes contratantes, tiene como resultado la división de las relaciones contractuales en acuerdos individuales. En consecuencia, si la Comisión admite el principio de que aun una reserva que ha sido aceptada limita el contenido de un tratado entre las partes contratantes, entonces no puede excluir al Estado cuya reserva no ha sido aceptada por una o más de las partes contratantes, de las relaciones contractuales con las demás partes en razón de la llamada preservación de la uniformidad de las relaciones jurídicas resultantes de la regla de unanimidad.

18. La conclusión de tratados internacionales es una manera excelente de fomentar las relaciones internacionales. Si la Comisión admite que los tratados colectivos son a menudo de naturaleza legislativa, debe considerar la práctica propuesta como un obstáculo al fomento del derecho internacional.

19. Respecto de ciertos asuntos de procedimiento, la delegación de Checoslovaquia considera que el Secretario General, en su calidad de depositario de los instrumentos internacionales, no carece de normas en materia de reservas. Puede seguirse la práctica establecida por las Naciones Unidas. El debate evidencia que no hay razón para que la práctica predominante no pueda ser aplicada a los tratados de carácter legislativo.

20. Por ejemplo, los Estados Unidos de América, Francia y Guatemala han ratificado con reservas la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados. Esas reservas han sido comunicadas a los demás signatarios sin pedirles su consentimiento expreso a esas reservas. Es solamente en el caso de la convención sobre el genocidio que se ha pedido una aceptación explícita. Sobre la base de una correcta comprensión material y jurídica de la cuestión de las reservas, es evidente que no hay ninguna razón para rechazar por esa razón instrumentos de ratificación o de adhesión. La delegación de Checoslovaquia estima que el Secretario General no sólo debe encontrar un *locus* para el depósito de los instrumentos de ratificación, sino que esos instrumentos deben ser aceptados y depositados como instrumentos jurídicamente válidos.

21. La tesis de que un Estado que tácitamente o *per factum concludens* no se ha opuesto a una reserva puede unirse ulteriormente a la objeción de otro Estado a tal reserva, es contradictoria a la garantía jurídica. No hay razón para que un tratado no pueda entrar en

vigor entre las partes contratantes en distintas fechas. El derecho de oponer reservas dentro del alcance limitado del artículo de que se trata, sólo puede ser atribuido a los Estados que hayan ratificado el tratado o se hayan adherido a él, y sólo entonces surgen relaciones jurídicas modificadas; nada queda fuera del tratado.

22. De nuevo debe subrayarse que el procedimiento adecuado que debe seguir el depositario se determina por una correcta evaluación del derecho de hacer reservas y del principio de reciprocidad entre las partes. No es posible establecer por medio de una resolución de procedimiento una regla que resuelva implícitamente la cuestión de la validez de un tratado respecto al cual una parte ha formulado reservas. Se ha dicho que la Corte Internacional de Justicia no está facultada para crear tal legislación, y que una norma internacional obligatoria sólo puede derivarse de un tratado de carácter legislativo concluido entre Estados.

23. La delegación de Checoslovaquia está convencida de que se han presentado abundantes pruebas de la existencia del derecho de hacer reservas y de preservar la condición de parte en un tratado aun cuando las reservas no hayan sido aceptadas.

24. El Sr. DE LACHARRIERE (Francia) desea aclarar el punto de vista de su delegación acerca de las reservas. Su delegación no ha tomado una posición respecto al fondo de la cuestión de las reservas a las convenciones multilaterales, ni desea hacerlo, porque considera que la Comisión no es el lugar adecuado para tratar esa materia. La Asamblea General no puede resolver el problema y, según parece, el consenso general es que debe remitirse a un órgano más autorizado, tal como la Comisión de Derecho Internacional o la Corte Internacional de Justicia. En tales circunstancias, como enmienda al proyecto de resolución de los Estados Unidos de América (A/C.6/L.114), la delegación de Francia ha bosquejado las medidas (A/C.6/L.118) que, a su juicio, debe adoptar la Sexta Comisión. Sugiere, en primer lugar, que se pida a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre el asunto. En segundo lugar, encarece que no se busque una solución provisional que sirva de norma a la Secretaría hasta que se haya recibido la opinión consultiva. En tercer lugar, propone que la Asamblea General recomiende a los Estados Miembros que eviten formular reservas a las convenciones y que, cuando sea necesaria alguna reserva, especifiquen en el texto de la convención el procedimiento que se ha de seguir respecto de tal reserva.

25. La Sexta Comisión parece estar de acuerdo en que el asunto sea remitido a un órgano competente, pero queda por discutirse la elección entre la Comisión de Derecho Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Respecto a la elección de la Corte Internacional de Justicia, han sido presentadas dos objeciones principales: 1) que podría resultar necesario modificar el derecho y elaborar nuevas reglas para satisfacer las necesidades de la práctica internacional; esa tarea, sin embargo, no sería de la competencia de la Corte sino que más propiamente correspondería a las atribuciones de la Comisión de Derecho Internacional; 2) que la Corte funda sus opiniones en el derecho existente; ahora bien, el derecho existente no proporciona a la Corte una base suficiente para que pueda emitir una opinión consultiva.

26. El Sr. Lacharrière reconoce que se plantea un doble problema: de *lege lata* y de *lege ferenda*. No obstante, considera que no sería prudente confundir ahora esos dos problemas.

27. La posición del Secretario General en cuanto a las reservas es cuestión que sólo debería resolverse a base del derecho existente, pues si surgiera una acción judicial al respecto, la Corte tendría que resolver el asunto sobre esa base. El derecho existente no puede descartarse en favor de un derecho más satisfactorio que habría de proyectarse para el futuro.

28. Por otra parte, la Asamblea General no es un órgano legislativo. Sólo podría recomendar a los Estados que en las futuras convenciones den fuerza de ley a los principios directivos definidos en la Comisión. A su juicio actualmente se trata de determinar cuál es el derecho existente al respecto y, en consecuencia, para evitar confusiones, el mejor camino sería consultar a la Corte Internacional de Justicia.

29. La segunda objeción a que el asunto sea remitido a la Corte Internacional de Justicia, fué formulada por el representante de Israel. Al examinar las fuentes del derecho que aplica la Corte, dijo que no existe ningún principio universalmente reconocido sobre la práctica general en esa materia. Mencionó el hecho de que la práctica de los Estados americanos difiere de la que predomina en otras partes del mundo. A juicio de la delegación de Francia, no obstante, la existencia de reglas especiales para una región geográfica determinada no es incompatible con la existencia de reglas diferentes para convenciones de alcance mundial.

30. Ciertas delegaciones han sugerido que la fórmula original de Francia (A/C.6/L.118) para consultar a la Corte es vaga y debe ser aclarada. Su delegación considera justificada esa crítica y, en consecuencia, ha retirado su propuesta original y ha apoyado el proyecto conjunto de resolución (A/C.6/L.123), que contiene cuestiones más precisas.

31. Refiriéndose al segundo punto de la propuesta original de Francia, es decir, que en el intervalo anterior al momento en que se reciban instrucciones autorizadas, no se disponga procedimiento alguno de carácter temporal relativo a las reservas, observa que, al parecer, muchas delegaciones consideran indispensable establecer algún procedimiento para ese período interino. No obstante, estima que sería inútil y peligrosa cualquier solución temporal que la Asamblea pudiera formular. La Corte podría emitir su opinión en un plazo relativamente corto y en ese caso sería innecesario cualquier solución temporaria. Además, respecto de la convención sobre el genocidio, ya no es urgente una solución inmediata. Mas, para ahorrar tiempo, la delegación de Francia ha sugerido que se autorice previamente al Secretario General para aceptar la opinión de la Corte.

32. Las delegaciones de Bélgica, el Perú y la URSS han criticado esa proposición. No obstante, considera que es indispensable colocar al Secretario General en condiciones de adoptar una actitud definida tan pronto como sea posible. Si se trata de una cuestión jurídica, no tiene objeto volver a abrir el debate sobre el asunto después de haber recibido la opinión consultiva de un órgano más capacitado que la Sexta Comisión, es decir, de la Corte Internacional de Justicia. Además, si la cuestión se resuelve con base jurídica, no se puede

objetar que el Secretario General reciba instrucciones de aceptar esa opinión.

33. La delegación de Francia considera que está fuera de la competencia de la Comisión y de la Asamblea General dar al Secretario General instrucciones temporales o permanentes, en lo referente a las reservas, porque esto no podría hacerse sin adoptar una actitud de fondo sobre la validez de las reservas. En consecuencia, si se proyecta una solución temporal, se tropezará con dificultades considerables, pues cualquier solución que disponga la Comisión podría estar en contradicción con la opinión de la Corte, lo que crearía una situación en extremo inconveniente.

34. Respecto de la parte tercera de la proposición de Francia, tendiente a que se eviten reservas en cuanto sea posible y a que en las convenciones se establezca el procedimiento relativo a ellas, expresa que muchos de los oradores han mostrado cómo el abuso del derecho a formular reservas puede destruir el alcance de una convención. En virtud de ello se justifica la exigencia de que las partes contratantes consientan en las reservas. No debe quebrantarse la unidad de las normas adoptadas y por esa razón la delegación de Francia sugiere que se solicite de los Estados que se abstengan de formular reservas o que se especifique en el texto las reservas que estén permitidas y el procedimiento que haya de seguirse respecto de ellas. Esa sugerencia se encontraba originalmente en una enmienda del Irán (A/C.6/L.119), que fué aceptada por la delegación de Francia e incorporada al último párrafo del proyecto conjunto de resolución (A/C.6/L.123).

35. El Sr. KHOMUSKO (República Socialista Soviética de Bielorrusia) manifiesta que su delegación, después de estudiar cuidadosamente el informe del Secretario General sobre la cuestión de las reservas, opina que los Estados soberanos tienen el derecho incontrovertible de adherirse con reservas a las convenciones. Ese derecho es un atributo de su independencia y soberanía, tanto en materias nacionales como en materias internacionales.

36. En derecho internacional existen numerosos precedentes de Estados que ratifican convenciones con reservas. Además de los muchos casos mencionados, existen numerosos precedentes en las Naciones Unidas. Así, el Canadá y Nueva Zelandia, al depositar sus instrumentos de adhesión a la convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, formularon la reserva de que las disposiciones relativas a los impuestos no serían aplicables a los funcionarios de las Naciones Unidas que fueran súbditos del Reino Unido y residieran en sus respectivos territorios.

37. Además, los Estados Unidos de América firmaron la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados con la reserva de que ninguna de las disposiciones de ese instrumento podría modificar en manera alguna el derecho vigente en los Estados Unidos de América; al firmar el mismo instrumento, Francia reservó su actitud acerca del método para pagar sus contribuciones. Recientemente los Estados Unidos de América aceptaron la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, con sujeción a numerosas reservas.

38. Así, nunca ha habido dudas en cuanto al derecho de los Estados a formular reservas a las convenciones a que se adhieren, cualquiera que fuere la actitud adop-

tada por los demás Estados participantes. Esta es una consideración fundamental para examinar el problema. La teoría opuesta, según la cual la adhesión de un Estado que formule reservas está condicionada a la aceptación de los demás Estados partes en la convención, y que ha sido sostenida por la *Harvard Research in International Law* y por el Sr. Brierly (A/CN.4/23), jurista del Reino Unido, no ha sido aplicada en la práctica.

39. En consecuencia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Checoslovaquia y las Repúblicas Socialistas Soviéticas de Bielorrusia y Ucrania han ejercido sus derechos soberanos al formular reservas a los artículos IX y XII de la convención sobre el genocidio. No obstante, el Secretario General ha rebasado los límites de sus funciones cuando, en lugar de notificar nuevamente a los demás Estados contratantes el depósito de dichas adhesiones, con arreglo al artículo XVII de la convención, les ha preguntado si aceptan las reservas contenidas en ellas.

40. En vista de tales consideraciones, la delegación de la RSS de Bielorrusia no puede aceptar propuesta alguna que limite el derecho de los Estados a formular reservas a las convenciones multilaterales.

41. El Sr. CABANA (Venezuela) manifiesta que, a juicio de su delegación, el problema general puede reducirse a tres cuestiones concretas, a saber: a) a falta de disposiciones específicas en relación con las reservas, ¿qué reglas deben aplicarse a los tratados concertados bajo la égida de las Naciones Unidas?; b) ¿Quién ha de determinar esas reglas?; y c) hasta que se las establezca, ¿qué procedimiento debe seguir el Secretario General? Prescindiendo de la cuestión relativa a quién debe resolver la cuestión, es indispensable encontrar una solución que pueda guiar al Secretario General.

42. La Comisión tiene ante sí dos proposiciones: la del Reino Unido (A/C.6/L.115) y la del Uruguay (A/C.6/L.116), que constituyen enmiendas a la propuesta original de los Estados Unidos de América (A/C.6/L.114). La delegación de Venezuela no comparte la opinión de la delegación del Reino Unido concerniente a que se extienda a los Estados signatarios los derechos que sólo pertenecen a los Estados que han ratificado un instrumento.

43. Apoya la opinión del representante del Uruguay, de que tanto el sistema interamericano como el procedimiento propuesto por el Secretario General son válidos y de que la selección entre ellos debe hacerse con fundamentos diferentes de los puramente jurídicos, pues la delegación de Venezuela estima que las consideraciones prácticas están íntimamente vinculadas con los aspectos jurídicos del problema.

44. Si fuere escogida la solución propuesta por el Secretario General, no podría aplicarse universalmente el principio fecundo de la codificación progresiva del derecho, seguido por los Estados americanos. Los tratados legislativos sólo serían ratificados por un número mínimo de Estados, que estuvieran dispuestos a aceptar cada una de las disposiciones del respectivo tratado. Otros Estados se abstendrían de ratificar el instrumento, por temor a que sus reservas fueran rechazadas. Cada tratado sería una fórmula estática de derecho internacional, que no podría desarrollarse en

profundidad ni en alcance. Al contrario, la fórmula panamericana, especialmente si se la considera en conjunto con el sistema de retiro de las reservas, favorece el desarrollo progresivo del derecho internacional.

45. Ha seguido el orador con gran atención las observaciones del representante del Reino Unido, en relación con las dificultades que implicaría la adopción del sistema panamericano. Esas objeciones en su mayoría se refieren a los tratados legislativos, tales como el Pacto Internacional de Derechos del Hombre, la Carta de las Naciones Unidas y la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades. Pero la Carta es un caso especial; no es sólo un tratado multilateral sino también un pacto constitucional con el específico carácter jurídico que ello implica. La Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades se funda en reglas aceptadas de derecho diplomático y en general no suscita problemas políticos importantes.

46. El Pacto de Derechos del Hombre es un ejemplo de tratados legislativos y si a él se aplicara el sistema panamericano, surgirían graves consecuencias, a juicio del representante del Reino Unido. Si el sistema de la aceptación unánime de las reservas se aplicara a los tratados legislativos, en poco tiempo el mundo estaría dividido en dos grupos, uno de los cuales aceptaría sin reservas las disposiciones de un tratado y otro, por diversas razones, quedaría excluido del tratado. La delegación de Venezuela no cree que tal situación pudiera ser preferible a la que resultaría si se aplicara el sistema panamericano. Dentro de éste, además de los países que aceptan todas las obligaciones de la convención, hay otros países que las aceptan en diversos grados.

47. Tal como ha observado el representante de los Países Bajos, las razones decisivas en favor de cualquier fórmula relativa a las reservas dependen de la naturaleza particular de cada instrumento, no de su alcance geográfico.

48. Es obvio que no deben permitirse reservas que pudieran destruir el carácter del instrumento, en el caso de ciertos tratados o de las disposiciones esenciales de los mismos. A este respecto, sería suficiente incluir en el texto de tales instrumentos las disposiciones expresas mencionadas en el proyecto de resolución presentado por el Reino Unido y en el proyecto de enmienda propuesta por el Uruguay. De este modo sería posible limitar las reservas a las disposiciones esenciales de una convención, amén de permitir la codificación del derecho internacional contractual.

49. En cuanto a saber si el asunto ha de ser remitido a la Comisión de Derecho Internacional o a la Corte Internacional de Justicia, hay argumentos de peso en favor de cada una de tales soluciones. Señala el orador que ni la labor de la Comisión ni la opinión de la Corte serían decisivas u obligatorias para la Asamblea General. No obstante, sería muy difícil modificar una opinión consultiva de la Corte, que es el órgano jurídico más elevado de las Naciones Unidas, en tanto que los resultados del trabajo confiado a la Comisión de Derecho Internacional podrían ser discutidos libremente y aceptados o modificados por la Asamblea. En consecuencia, la delegación de Venezuela apoya los argumentos en favor de que se remita el asunto a la Comisión de Derecho Internacional.

50. En cuanto al tercer aspecto del problema, el de las normas que habría de seguir el Secretario General hasta que se obtenga una solución definitiva al respecto, la delegación de Venezuela no considera objetable la adopción del procedimiento propuesto por la delegación del Uruguay. Juzga que la adopción del sistema panamericano en este intervalo demostraría las ventajas del mismo y, por lo tanto, apoya el proyecto de resolución del Uruguay.

51. El Sr. PETREN (Suecia) manifiesta que la actitud de su delegación quedó expresada en su propuesta de enmienda al proyecto de enmienda presentado por el Reino Unido al proyecto de resolución auspiciado por los Estados Unidos (A/C.6/L.121). Pero como el debate ha demostrado que una decisión sobre la cuestión que se examina sería prematura, el representante de Suecia retirará su enmienda y apoyará el proyecto conjunto de resolución (A/C.6/L.123), aunque con algunos de los cambios de redacción propuestos en el documento (A/C.6/L.124).

52. El Sr. SULTAN (Egipto) felicita al Secretario General por su informe tan claro y tan cuidadosamente preparado sobre esta cuestión. Las intervenciones de los diferentes representantes han contribuido también a despejar la situación.

53. Los varios proyectos de resolución presentados parecen tener un rasgo común: todos tienden a evitar que se adopte una solución definitiva en este momento, y a referir la cuestión a un órgano jurídico competente. El proyecto de resolución (A/C.6/L.123) presentado conjuntamente por la delegación de Egipto y otras delegaciones, está destinado — y él espera que la Comisión así lo interprete — a conciliar las opiniones de los miembros sobre todos los demás aspectos de la cuestión y asegura que no prejuzga sobre la cuestión principal en modo alguno. El preámbulo se limita a señalar las dificultades procesales suscitadas por las reservas, así como por las objeciones posibles a tales reservas, y la parte dispositiva se refiere únicamente al problema de las convenciones multilaterales concluidas bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El problema se mantiene así, dentro de los límites del derecho vigente, con el deseo de no emitir un juicio sobre el procedimiento seguido por algunos Estados o grupos de Estados. Tampoco se ha planteado la cuestión de la utilidad y eficacia de los distintos procedimientos.

54. En cuanto a la selección del órgano al que ha de consultarse en este caso, los autores del proyecto conjunto de resolución se decidieron por la Corte Internacional de Justicia, por las razones expuestas por los representantes de Francia y del Reino Unido. Las tres cuestiones que han de consultarse a tal órgano, se explican por sí mismas y en ellas se trata de abarcar todos los aspectos del problema discutido en la Comisión.

55. En respuesta a algunas observaciones formuladas precedentemente por el representante de Polonia, el orador señala que si el derecho internacional vigente es el expuesto por el representante de Polonia, la Corte Internacional de Justicia no dejará, ciertamente, de reconocerlo en su opinión consultiva.

56. En cuanto al procedimiento que deberá seguir el Secretario General hasta que la Corte emita opinión, la delegación de Egipto espera que el Secretario Gene-

ral se abstendrá de adoptar actitud alguna hasta que haya recibido la opinión consultiva de la Corte.

57. Finalmente, el Sr. Sultan manifiesta que su delegación acepta en principio la enmienda conjunta (A/C.6/L.124) que acaba de distribuirse al proyecto conjunto de resolución (A/C.6/L.123), pero que desea examinarla de nuevo antes de declarar su actitud a este respecto.

58. En respuesta a las observaciones hechas por los representantes de la UNION SUDAFRICANA y del REINO UNIDO, el PRESIDENTE aclara que la sugerencia que hizo se encaminaba a que los autores de las distintas propuestas se reunieran privadamente para tratar de preparar un texto aceptable para todos.

59. El Sr. ROBERTS (Unión Sudafricana) dice que ninguno de los muchos oradores que han participado en el debate ha puesto en tela de juicio el principio fundamental en derecho, tanto internacional como civil, de que las partes son libres de convenir lo que consideren conveniente, y que sólo el consentimiento *ad idem* puede tener fuerza obligatoria. La Comisión no puede impedir que una nación llegue a un acuerdo con otros países, en lo referente a todo el tratado o, a una parte del tratado, si la convención contiene disposiciones separables. Las convenciones que no admiten reservas, citadas como ejemplo en la propuesta del Reino Unido, son análogas a los contratos indivisibles que sólo pueden aceptarse o rechazarse. No se ha llegado todavía a alcanzar una legislación por medio de tratados, aunque todo tratado puede considerarse legislativo en el sentido de que obliga a las partes interesadas.

60. El Sr. Roberts no comparte la opinión del representante de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, de que un Estado tiene derecho a adherirse con reservas a las convenciones y que las demás partes en dichas convenciones no tienen derecho a objetar tales reservas; este es un juicio *non sequitur*.

61. No es necesario, sin embargo, profundizar el examen de la cuestión, ya que parece que la mayor parte de los representantes están de acuerdo en referirla a un órgano jurídico competente y reanudar el examen de la misma en otro momento, teniendo en cuenta la opinión consultiva que se reciba.

62. El Sr. Roberts protesta sin embargo, contra la disposición del proyecto conjunto de resolución que dispone la inmediata aplicación de la resolución del órgano jurídico consultado. Tal procedimiento es peligroso y el orador ha de votar contra él.

63. El Sr. Roberts, estima, finalmente, que debería nombrarse un comité de redacción que, teniendo en cuenta el debate, diera forma a la consulta que ha de solicitarse al órgano jurídico.

64. El Sr. ROLING (Países Bajos) hace notar que el representante de Polonia, con el propósito de hallar una solución al problema que la Comisión tiene ante sí, se ha remontado a los precedentes constituidos por los tratados celebrados en el siglo XIX. Este sistema no es del todo apropiado; las relaciones internacionales se han desarrollado considerablemente a partir del siglo XIX, época en que problemas como el que se examina eran absolutamente desconocidos. En aquella época la mayoría de los tratados, aun los multilaterales, eran producto del regateo y constituían el pretexto en que

muchas naciones apoyaban sus relaciones bilaterales, mientras que en nuestros días las naciones soberanas colaboran en el establecimiento de normas jurídicas, hasta el punto de limitar su propia soberanía.

65. Como resultado de ello, las relaciones internacionales han cambiado considerablemente y, por consiguiente, no pueden extraerse conclusiones de las antiguas costumbres. Así, por ejemplo, el estado A, dispuesto a someterse a cierta norma, no sólo está interesado en que el estado B se someta a la misma norma, sino que casi en igual grado se interesa en las relaciones entre el estado B y el estado C en lo que concierne a la norma de que se trata. Por esta razón es lógico y adecuado el sistema que, en el caso de tratados multilaterales legislativos, concede a todas las partes el derecho de oponerse a las reservas que formule otra parte, hasta el punto de excluir a ésta del tratado. El concepto de soberanía nacional en que se basa la actitud de los representantes de Polonia y de la URSS, es anticuado y ha dejado de ser aplicable.

66. En cuanto al problema que se examina, y no obstante haber apoyado anteriormente la idea de que la cuestión fuera resuelta por la Asamblea General, vistas las diferencias de opinión relativas a la solución que haya de adoptarse y que se han puesto de manifiesto en el curso del debate, el Sr. Roling piensa ahora que sería mejor referir la cuestión a la Corte Internacional de Justicia. Pero con una condición, sin embargo: que deberá solicitarse la opinión de la Corte respecto a convenciones específicas. Existen muchos tipos diferentes de convenciones; algunas son realmente legislativas, mientras otras, como la Convención sobre la Declaración de Fallecimiento de Personas Desaparecidas, son de carácter bilateral o responden a concesiones mutuas.

67. El proyecto conjunto de resolución (A/C.6/L.123) reconoce la existencia de diferentes tipos de convenciones, pero no toma en cuenta que cuando se trata de reservas a tratados, la diversidad de tipos puede exigir soluciones distintas y que, por consiguiente, es imposible pedir a la Corte una opinión consultiva en relación con los tratados de las Naciones Unidas en general.

68. Consecuentemente, la delegación de los Países Bajos, unida a otras delegaciones, presentó un proyecto de enmienda (A/C.6/L.124) enumerado específicamente varias convenciones sobre las cuales la Corte deberá emitir una opinión consultiva. De esta manera podrán también obviarse las objeciones de algunas delegaciones que se oponen a que se someta la cuestión a la Corte, basándose en el hecho de que la Corte no tiene competencia para emprender tareas de naturaleza legislativa, ya que sólo se le pedirá que fije el procedimiento que deberá seguirse respecto a determinados instrumentos, cuestión que es enteramente de su competencia.

69. Otra cuestión que aun no se ha planteado es la de saber si en el caso de un tratado determinado de tipo legislativo, tal como la convención sobre el genocidio, sería suficiente un procedimiento general, sin distinguir entre las diferentes reservas que pueden hacerse. Estrictamente hablando, el procedimiento que ha de seguirse no debe depender únicamente del tipo de convención, sino también del tipo de reserva de que ha sido objeto. Esto, sin embargo, nos llevaría muy lejos. No podría hallarse un medio para distinguir

entre reservas esenciales y no esenciales; y, por consiguiente, por motivos de conveniencia, en los casos de convenciones legislativas deberá concederse a las partes el derecho a oponerse a todas las reservas.

70. El orador espera que la Comisión adoptará el proyecto conjunto de resolución y el proyecto conjunto de enmienda, lo que permitirá a la Corte dar al Secretario General la orientación deseada respecto a determinados instrumentos.

71. El Sr. LACHS (Polonia) desea responder a las observaciones de algunos representantes sobre su declaración. Si hubo de referirse a precedentes en el siglo XIX, es porque los problemas jurídicos importantes sólo pueden ser resueltos conociendo sus antecedentes históricos, económicos y políticos.

72. La actitud que adoptó su delegación es esencialmente la misma que asumieron los países latinoamericanos, también basada en el concepto de la soberanía del Estado. Además, no todos sus ejemplos han sido tomados del siglo XIX; igualmente citó muchos de la época de la Sociedad de las Naciones y del período transcurrido entre las dos guerras mundiales. En el pasado, las convenciones multilaterales se redactaban a base de unanimidad, mientras que en nuestros días la mayoría de las convenciones se redactan en conferencias internacionales y por decisión de la mayoría. En muchos casos las decisiones se adoptan casi inmediatamente, sin que sea posible un debate completo de la cuestión, debido a la aceptación de una moción de clausura del debate, lo que descarta el principio de negociación. Por consiguiente, deben permitirse las reservas, a fin de vindicar el principio de negociación y los derechos de las minorías.

73. Los distintos países tienen sistemas económicos y políticos diferentes; si ellos deben convivir pacíficamente, debe protegerse la igualdad soberana de los Estados que ha sido reconocida en la Carta y por la Corte Internacional de Justicia y muchos otros organismos internacionales. El representante del Reino Unido ha sostenido que el derecho a formular reservas unilateralmente podría conducir a una situación en que la mayoría se viera sometida a la voluntad de la minoría. No es así; la mayoría será siempre libre de adherirse a las convenciones en su forma original, mientras que aquellos que no acepten todas las disposiciones de las convenciones, podrán llegar a ser partes en ellas formulando reservas que limiten o — como ocurre con frecuencia — amplíen el alcance de la convención.

74. Siempre es posible, naturalmente, argüir *ad absurdum*; una reserva al artículo I de la convención sobre el genocidio, por ejemplo, anularía los propósitos de la convención y, por consiguiente, no podría ser aceptada. Naturalmente, tampoco podría hacerse reserva alguna a la Carta de las Naciones Unidas.

75. El representante del Reino Unido parece creer que cualquier reserva al Pacto de Derechos del Hombre podría conducir a una situación imposible, ya que las disposiciones relativas al empleo de la tortura o, v.g., podrían resultar inaplicables entre algunas partes en el Pacto. En su opinión, sin embargo, el número de partes en un tratado no modifica en modo alguno las obligaciones consignadas en él; la única diferencia entre una convención bilateral y una convención multilateral es que, cuando se trata de una convención

bilateral sólo un Estado puede pedir cuentas a otro Estado por la violación de la convención, mientras que en el caso de una convención multilateral muchos Estados pueden pedírsela.

76. Por consiguiente, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista actual, el sistema preconizado por los países latinoamericanos es el único apropiado para las Naciones Unidas. Muchas teorías y declaraciones de publicistas se han expuesto ante esta Comisión; pero se trata sólo de fuentes secundarias del derecho internacional. Las Naciones Unidas deben reconocer el derecho de todos los Estados a adherirse con reservas a las convenciones, a menos que dichas convenciones estuvieran destinadas a un grupo limitado de Estados.

77. El Sr. MOROZOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, si él ha entendido bien al representante del Reino Unido, su Gobierno ha sido criticado de inconsecuente. El representante del Reino Unido se ha referido a una cita de un manual soviético mencionado en el memorándum del Secretario General (A/1372 párrafo 20) y ha señalado el contraste que existe entre las opiniones expresadas en el texto de dicho libro y las opiniones expuestas por la delegación de la URSS. Esta crítica es algo sorprendente ya que no hay razón alguna por la cual las opiniones personales de los escritores de un país deban coincidir con las del gobierno.

78. El representante del Reino Unido aludió a lo peligroso que sería no adoptar el sistema que él auspicia, e ilustró sus observaciones con una referencia al Pacto de Derechos del Hombre. Hizo entender también que, a menos que se adoptara su propuesto sistema, algunos Estados podrían aplicar torturas y otros no, a pesar de que el empleo de la tortura está expresamente prohibido por el Pacto. El Sr. Morozov considera que ese ejemplo es algo fantástico, ya que es muy difícil que tal situación llegue a producirse.

79. Desgraciadamente, la actitud del Gobierno del Reino Unido respecto a las reservas parece no coincidir completamente con las opiniones expresadas por el Sr. Fitzmaurice, puesto que dicho Gobierno ha presentado una reserva al Convenio de Ginebra sobre la Protección a la Población Civil en Tiempo de Guerra. La reserva se refiere a la disposición según la cual una potencia ocupante sólo podrá imponer la pena de muerte cuando se trate de delitos castigados con la misma pena por la ley que regía en el territorio ocupado con anterioridad a la ocupación. En otras palabras, el Gobierno del Reino Unido se ha reservado el derecho a imponer la pena de muerte cuando le parezca conveniente, sin tener en consideración las leyes del territorio respectivo. Tal reserva difícilmente podrá ser calificada de humanitaria y, sin embargo, el Gobierno del Reino Unido ha estado ciertamente autorizado a hacerla. De todos modos, si se adoptara el sistema preconizado por el Sr. Fitzmaurice, bastaría una objeción a la reserva formulada por cualquiera de las partes en la convención, para impedir que el Reino Unido fuera parte en tal convención. Evidentemente, ése sistema no facilita la cooperación internacional.

80. A pesar de la gran diversidad de opiniones, parece existir un punto sobre el cual podría lograrse el acuerdo de las partes. Todas las delegaciones probablemente convendrán que no es necesario que la Sexta

Comisión adopte inmediatamente una decisión definitiva sobre el problema de las reservas, ya que han dejado de existir las razones que, en un principio, hicieron urgente la solución de dicho problema.

81. Por esta razón, el Sr. Morozov apoyará la propuesta del representante del Canadá, de que se establezca una subcomisión que trate de coordinar los diferentes proyectos de resolución y las enmiendas presentadas. Sugiere, sin embargo, que la Comisión se pronuncie antes sobre tres cuestiones de principio: a) ¿Deberá darse instrucciones temporales al Secretario General?; b) la Comisión ¿deberá solicitar la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia? y c) ¿Deberá referirse el problema a la Comisión de Derecho Internacional? Si la Comisión adopta una decisión sobre estos tres puntos, la subcomisión tendrá alguna base firme para iniciar sus tareas.

82. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) desea responder a las observaciones que acaba de hacer el representante de la URSS.

83. En primer término, destaca el hecho de que nunca ha objetado las reservas como tales, sino se ha limitado simplemente a sostener que las reservas no podrán hacerse unilateralmente a último momento, sin el consentimiento de las demás partes interesadas.

84. En segundo lugar, el representante del Reino Unido no ha dicho que un Estado que ratifique el Pacto sobre Derechos del Hombre, podrá hacer una reserva que se refiera a las disposiciones que prohíben la tortura. El Sr. Fitzmaurice aclara que se ha limitado simplemente a decir que un Estado puede ratificar el Pacto asumiendo así la obligación de no emplear la tortura, y al mismo tiempo podría objetar una reserva hecha por algún otro país. Con arreglo al sistema panamericano, el Pacto no regiría entre esos dos países. Por consiguiente, el primer país tendría una obligación general de no utilizar la tortura, bien que teóricamente estaría autorizado, en cuanto se refiere al país que hubiera hecho esta reserva, a recurrir a la tortura. Es obvio que tal situación sería absurda.

85. Finalmente, el representante de la URSS se ha referido a una reserva hecha por el Gobierno del Reino Unido a una disposición del Convenio de Ginebra relativa a la Protección a la Población Civil en Tiempo de Guerra. Esta reserva se basa en consideraciones de necesidad militar y no en la falta de ideales humanitarios. Esa reserva se refiere a la disposición siguiente:

"Las disposiciones de carácter penal promulgadas por la Potencia ocupante en armonía con los artículos 64 y 65 no pueden prever la pena de muerte en cuanto a las personas protegidas, salvo en los casos en que éstas resultaren culpables de espionaje, actos graves de atentados contra las instalaciones militares de la Potencia ocupante, o infracciones con malicia que causaren la muerte de una o varias personas, y a condición de que la legislación del territorio ocupado, vigente antes de la ocupación, aplique la pena capital en casos tales." (Artículo 68, párr. 2).

86. Es evidente que la Potencia ocupante habría de hallarse en una situación extremadamente difícil si le fuera imposible sancionar con la pena de muerte delitos tan graves como el espionaje y el sabotaje. Además, el

Reino Unido no es el único país que ha formulado una reserva a tal disposición, y lo ha hecho sólo después de largas discusiones y teniendo pleno conocimiento todas las partes interesadas, acerca de las intenciones de su Gobierno.

87. El Sr. ABDON (Irán) manifiesta que, como uno de los autores del proyecto conjunto de resolución (A/C.6/L.123), está dispuesto a aceptar la enmienda presentada por las delegaciones de Bélgica, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos y Suecia (A/C.6/L.124). Conviene en que la cuestión que se someta a la Corte Internacional de Justicia deberá redactarse en términos precisos; hasta está dispuesto, en realidad, a limitar las preguntas tan sólo al caso específico de las reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio formuladas por los Gobiernos de Bulgaria y Filipinas. Al mismo tiempo, sin embargo, considera importante decidir qué procedimiento deberá adoptarse respecto a las reservas en general, y cree que debería pedirse a la Comisión de Derecho Internacional que preparara un informe sobre este aspecto general del problema.

88. El Sr. Abdoh declara que apoya la sugestión del Presidente encaminada a que los autores de los proyectos de resoluciones y de las enmiendas se reúnan privadamente para tratar de redactar un texto común. Si tal procedimiento fracasara, estaría de acuerdo con el representante de la URSS en que se estableciera una subcomisión y en que la Comisión se pronuncie previamente sobre ciertas cuestiones de principio.

89. El Sr. TATE (Estados Unidos de América), y el Sr. LE SAGE (Canadá) apoyan también la sugestión del Presidente.

90. El Sr. JIMENEZ DE ARECHAGA (Uruguay) subraya el hecho de que una subcomisión compuesta

por las delegaciones que han presentado proyectos de resolución o enmiendas no representará adecuadamente las diversas opiniones que se han expuesto en la Comisión. Así por ejemplo, a pesar de que la gran mayoría en la Comisión considera que la cuestión deberá referirse a la Comisión de Derecho Internacional, la subcomisión estaría compuesta casi enteramente por representantes que opinan que debería ser referida a la Corte Internacional de Justicia. Por consiguiente, tal subcomisión no estaría capacitada para someter ningún informe a la Comisión y cualquier resolución que pudiera adoptar debería ser presentada en nombre de las respectivas delegaciones.

91. El Sr. ABDON (Irán) observa que el procedimiento que él había apoyado consiste en que los autores de proyectos de resoluciones y de enmiendas se reúnan en privado. Si no logran preparar un texto conjunto que resulte satisfactorio para la mayoría de la Comisión, podría establecerse entonces una subcomisión oficial.

92. El Sr. MOROZOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las reuniones privadas que celebren las delegaciones no interesan a la Comisión. Se ha de tratar de facilitar las tareas de la Comisión estableciendo una subcomisión oficial y ante todo debería votarse sobre las cuestiones de principio que él ha planteado anteriormente.

93. El Sr. TATE (Estados Unidos de América), apoyado por el Sr. ABDON (Irán) propone que se levante la sesión.

La moción queda aprobada.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.